

que las violan; y que por lo mismo, el fallo del Juez de 1ª instancia ha debido concretarse á este punto, concediendo ó negando el amparo que se le pidió, sin complicar ni confundir con la única materia del juicio, apreciación alguna relativamente á la facultad constitucional que concede al Ejecutivo el artículo 33 de la Constitución, sin que para proceder en los términos que lo hizo el citado Juez, sea razón bastante que tuvo conocimiento oficial de la expulsión decretada, y que el Promotor fiscal, incidiendo el primero en el error del Juzgado, haya pedido respecto de la orden de expulsión, desentendiéndose de la verdadera y única materia del debate.

Por tales consideraciones, y con fundamento en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, la Suprema Corte de Justicia declaró: que se reforma la sentencia del Juzgado 2º de Distrito en los términos que expresan las siguientes proposiciones: Primera: la Justicia de la Unión ampara y protege al súbdito francés Gustavo Levy, contra los procedimientos arbitrarios del C. Gobernador del Estado de Morelos, que ordenó reducir á prisión al expresado Levy, manteniéndolo en ella con notable exeso del término legal de una detención, y con infracción de los artículos 19, 20 y 21 de la Constitución federal. Segunda: no se hace de claración alguna relativamente á la expulsión del mismo súbdito francés Gustavo Levy decretada por el Supremo Gobierno, por no haberse pedido amparo contra esta providencia ni poderse seguir los juicios de esta especie sino á petición de la parte agraviada. Tercera: manifiéstese al C. Juez de Distrito y Promotor fiscal del Juzgado, que en lo sucesivo cuiden, el segundo de pedir con relación á la demanda del quejoso, y el primero de resolver sobre ella, sin extender su resolución á puntos no comprendidos en la demanda.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; pu-

TOMO V.—PARTE II.

blíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría respecto del primer punto, y por unanimidad respecto de los dos siguientes, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por los reos Donaciano Huerta, Juan José y Felipe Flores, contra las providencias de la Gefatura política del Estado, que los condenó á sufrir la pena de muerte como salteadores.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que el C. Gefe político al sentenciar á la pena de muerte á los reos Donaciano Huerta, José Juan y Felipe Flores por el delito de robo con asalto en despoblado y á mano armada, aplicó la ley vigente para juzgar esta clase de delitos que es la de 18 de Mayo de 1872. Esta ley de ninguna manera puede calificarse como anticonstitucional segun pretenden los defensores de los reos, pues fué expedida por el Congreso de la Unión en virtud de las facultades que le conceden los artículos 28 y 29 de la Carta fundamental de la Repúbli-

ca, cuyas facultades desconocen los defensores: y aun suponiendo sin conceder que pudiera abrigarse la duda de que la ley fuese anticonstitucional, esta calificación no es de la competencia de los defensores de los reos ni de la del fiscal.

En ningún sentido debe entenderse que la ley referida ataca la soberanía de los Estados, puesto que se expidió en virtud de las circunstancias previstas por el citado artículo 29 de la Constitución general. Por estos fundamentos, y por que en el caso no aparece ninguna infracción de las garantías á que se refiere el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, el fiscal aunque enemigo de la pena de muerte, sugeriéndose como debe hacerlo á las leyes relativas en este caso, pide: que la Justicia de la Union no ampare ni proteja á los reos Donaciano Huerta, José y Felipe Flores, contra la sentencia de muerte que en su contra pronunció la Gefatura política de este Partido por delito de robo en despoblado y con asalto.

Durango, 17 de Julio de 1873.—*Juan Ndjera*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Julio 24 de 1873.—*Juan Ndjera*.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Durango, 24 de Julio de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por los reos puestos en capilla, Donaciano Huerta, Juan José y Felipe Flores, contra las providencias del C. Gefe político, en cuya virtud fueron condenados á sufrir la pena de muerte. Vista la suspensión del acto reclamado, á causa de su urgencia notoria; examinado el informe y demas constancias relativas, remitidas por la Gefatura; atendido el pedimento fiscal y cuanto mas ver convino. Considerando: que de las referidas constancias aparece plenamente probado, que los quejosos han cometido varios asaltos en despoblado, sin que hayan podido justificar la coartada, á pesar de haberlo

pretendido. Que en consecuencia, han estado comprendidos en la ley de salteadores y plagiarios dada por el Congreso de la Union. Que por tal motivo, la Gefatura política ha obrado en la órbita de sus facultades al haber hecho aplicacion de dicha ley. Que la referida ley no es anticonstitucional como erróneamente se ha creído, supuesto que tiene todos los requisitos que demarca el artículo 29 de la Constitución general de la República. Que por otra parte, esa ley suspende algunas garantías individuales, y no está en las facultades de los Estados hacer esa suspensión, ni pueden dar disposicion alguna sobre el particular.

Por todo lo expuesto, el C. Juez de Distrito del Estado, Lic. Gerónimo Sida, dijo que debía declarar; primero: la Justicia de la Union, no ampara ni protege á los reos Donaciano Huerta, Juan José y Felipe Flores, contra los providencias de la Gefatura política que los condenó á sufrir la pena de muerte; segundo: publíquese esta sentencia por los periódicos; remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision, y sáquense las copias correspondientes para la redaccion del Semanario Judicial.

Y por este autó juzgando en definitiva, así lo proveyó y firmó el expresado C. Juez, por ante mí. Certifico.—*Gerónimo Sida*.—Una rúbrica.—*Juan B. Arellano*, secretario.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Julio 24 de 1873.—*Juan B. Arellano*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 24 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 17 de Mayo del corriente año, promovieron en la ciudad de Durango, ante el Juez de Distrito del Estado del mismo nombre, Donaciano Huerta, José Juan Flores y Felipe Flores presos en la cárcel de esa ciudad, esponien

do: que acusados como salteadores, han sido sentenciados por el Gefe político del partido de la capital de Durango, á sufrir la pena de muerte, aplicándoseles la ley de 18 de Mayo de 1871, prorogada por la de 23 del mismo mes del año próximo pasado de 1872; que habiendo sido esa ley expedida por el Congreso de la Union, sin facultades, por que castigar los delitos sobre que versa, es propio y esclusivo de los Estados donde se cometen esos delitos, con esa ley la autoridad federal ha vulnerado la soberanía del Estado; y que en esta virtud, de conformidad con la fraccion 2ª del artículo primero de la ley orgánica; de los artículos 101 y 102 de la Constitucion de la República, el amparo contra la ley segun la cual se les ha juzgado, procede en derecho y piden se les conceda.

Vistas las constancias de autos y considerando: 1º que la ley de 18 de Mayo de 1871 prorogada por la de 23 de Mayo de 1872, contra la cual se pide el amparo, fué expedida suspendiéndose algunas garantías individuales; 2º: que la suspension de garantías individuales, importa en cuanto á los actos que se relacionan con las garantías suspendidas, una interrupcion temporal del régimen ordinario establecido por la Constitucion federal; 3º: que no está en las facultades de los Estados suspender las garantías individuales, y que esta facultad solo pueden ejercitarla los poderes federales en los términos que expresa el artículo 29 de la propia Constitucion; 4º: que en consecuencia, la ley de Mayo reclamada que suspende algunas garantías para los salteadores, debe ser considerada como una ley federal y por lo mismo, sus disposiciones no deben estar sujetas á las diversas opiniones de las Legislaturas de los Estados; 5º: que habiendo ejercido la jurisdiccion en el caso de que se trata, una autoridad del Estado, no puede alegarse que la ley de Mayo repetida, hubiera podido restringir ó vulnerar la soberanía de un Estado, imponiendo como jueces para el ejercicio de la jurisdic-

cion en delitos cometidos en su territorio y del orden comun, autoridades federales, por lo cual no debe tomarse en cuenta esta imposicion; 6º: que en el caso presente, el Gefe político de Durango ha procedido conforme á las prescripciones de la citada ley de Mayo, sin que pueda decirse que al imponer la pena de muerte por el delito de asalto, haya violado alguna garantía individual, puesto que el artículo 23 de la Constitucion federal permite se imponga la pena de muerte á los salteadores.

Por los fundamentos espuestos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Se confirma la sentencia que en 24 de Julio del corriente año, pronunció en la ciudad de Durango el Juez de Distrito del Estado, declarando: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los reos Donaciano Huerta, Juan José Flores y Felipe Flores, contra las providencias de la Gefatura política, que los condenó á sufrir la pena de muerte como salteadores.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoria de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*M. de Castañeda y Najera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico: México, Octubre 2 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.